

El cotidiano 54

## De Washington al Cerro de las Campanas: La Exportación de la Democracia a la Hora del TLC

Mayo 1993

Luis Hernández Navarro [\*]

Para David Brooks

"Nuestra historia, a partir de la independencia, es la historia de nuestra terca resistencia a dejarnos salvar por nuestros vecinos. En este reportaje se hablará de todos esos intentos fracasados por nuestra culpa. Lo extraordinario es la paciencia de nuestros amigos que, pese a nuestra ingratitud, insisten una y otra vez a lo largo del siglo en hacernos felices. En ningún momento nuestros buenos vecinos se han olvidado de nosotros; nunca nos han dejado de la mano esperando pacientemente que seamos razonables algún día y aceptemos su tutela definitivamente, su protección bondadosa, esperan el momento en que al fin nos echemos en sus brazos, arrepentidos de haber estado frustrados en buena parte su destino manifiesto". [1]

Nuestros buenos vecinos

Durante años amplios sectores de la sociedad nacional vieron en las relaciones entre México y los Estados Unidos uno de los grandes problemas nacionales. Se trataba de un punto de vista que, aunque emitido desde la izquierda, no era exclusivo de esta corriente política. Más allá de los agravios sufridos en carne propia, la revolución cubana, la intervención norteamericana en Vietnam, el golpe de Estado en Chile, el apoyo a las dictaduras militares de centro y sudamérica, el bloqueo a Nicaragua y el apoyo a la contra, alimentaron un importante sentimiento antinorteamericano. Apenas hace unos años, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, los medios masivos de comunicación mostraban una imagen de México en la que dominaba el tráfico de drogas, la corrupción y la inseguridad que, al rebotar dentro del país, confirmaba las actitudes "redentoras" de los buenos vecinos.

Sin embargo, cerca de treinta años después de la publicación del libro de Mario Gill, las actitudes de las élites políticas de casi todas las orientaciones partidarias hacia el vecino del norte se han modificado sustancialmente.

En un recorrido por los circuitos internacionales que ha tenido varias estaciones, la administración de Salinas de Gortari comenzó por procurar conquistar en el exterior la legitimidad que el voto popular y el desaseo en el manejo del proceso electoral le negaron en las elecciones federales de 1988, se detuvo en el requerimiento de forjarse una imagen de reformador radical (el Gorbachov mexicano) del país para atraer los capitales foráneos que su proyecto económico requería, y, finalmente se concentró en una intensa labor de

cabildeo dentro de los Estados Unidos para sacar adelante el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Por su parte, la oposición cardenista hizo del trabajo en los Estados Unidos una prioridad. Su recorrido siguió al que Acción Nacional había emprendido años atrás, pero, muy probablemente, lo desbordó en amplitud e impacto. Las continuas giras de Cuauhtémoc Cárdenas a ese país para denunciar el fraude electoral, para establecer relaciones políticas que dieran credibilidad a sus posiciones en los círculos del poder washingtoniano, y para construir una corriente partidaria estable con los mexicanos migrantes, lo convirtieron en la figura de la oposición política mexicana más conocida en el vecino país del norte.

La "conquista del capitolio" no se circunscribió, empero, a las fuerzas partidarias sino que fue protagonizada también por un par de nuevos actores que, aunque con poco peso político en el escenario nacional, comenzaron a jugar un papel cada vez más relevante en el escenario internacional: las Organizaciones no Gubernamentales de Promoción al Desarrollo (ONGs) [2] y una franja de organizaciones sociales autónomas o independientes. Más o menos rápidamente, su actitud antinorteamericana se fue transformando, en un beligerante pragmatismo donde, en la medida en que "más y más cosas acerca de México -tanto en el terreno económico (TLC) como en el político (la decisión de avalar a CSG) se deciden en Washington..." [3]

Aunque desde el lado mexicano la búsqueda de legitimidad de los diversos actores políticos y el problema de la democracia (desde la lógica específica de la oposición) fueron los elementos fundamentales para ensayar la "transnacionalización" de la política diplomática, no sena sino hasta el momento en el que se propone firmar el TLC que esta transnacionalización se hace presente en forma desde el lado estadounidense. Con el TLC "la política nacional se convierte en política internacional y la política internacional se transforma en política nacional". [4]

## El cabildeo

La acción combinada -y en muchos sentidos contrapuesta- de la diplomacia gubernamental mexicana, con la diplomacia partidaria (PRD y PAN) y la diplomacia ciudadana (ONGs y organizaciones sociales) para influir en las política norteamericanas hacia México se ha desarrollado sobre un terreno sumamente complejo, en el que evidentemente, el resultado final de las iniciativas ha terminado siendo distinto a las intensiones iniciales. Las distintas estrategias han encontrado en los Estados Unidos aliados específicos que, sobre la base de su propia agenda, han combatido o impulsado las diversas posiciones mexicanas.

El gobierno mexicano, más allá de las tradicionales armas de la diplomacia convencional, se ha esforzado por ganarse a los medios masivos de comunicación, al tiempo que ha invertido grandes sumas de dinero en la contratación de firmas norteamericanas para realizar actividades de cabildeo.

La "seducción" a la prensa norteamericana dio resultados inmediatos. Según Ken Newman, estudioso de las relaciones entre los medios de comunicación norteamericanos y el gobierno de México "Con la administración de Salinas ocurrió un cambio radical: los esfuerzos se encaminaron a tratar de mejorar, por una parte, el tono de los reportajes sobre México (...) De tal manera que en el inicio del sexenio de Salinas hubo una mejoría en las relaciones con la prensa norteamericana, y la cobertura de las cadenas privadas devino más favorable hacia México. [5]

Según un artículo de Mathew Vita distribuido por el servicio noticioso Cox News Service, el gobierno de Salinas gastó 14 millones de dólares en la promoción del TLC durante 1992 y gastará, cuando menos, 50 millones de dólares más durante 1993. De acuerdo a un informe de Herminio Rebollo y Leticia Rodríguez publicado en El Financiero, [6] el gobierno mexicano erogó cerca de 56 millones de dólares durante las negociaciones del TLC en rubros como consultoría, gastos de operación, salarios, difusión, promoción y relaciones públicas; sólo para actividades de cabildeo y relaciones públicas se gastaron entre 12 y 13 millones de dólares. Para ello, el gobierno mexicano contrató a 13 agencias de consultores y encargados de relaciones públicas.

La oposición perredista, por su parte, ha ganado una amplia interlocución a partir de la acción combinada de las giras de Cuauhtémoc Cárdenas, una amplia red organizativa de partidarios y simpatizantes estructurada en tono a mexicanos migrantes y México-norteamericanos, la labor de intelectuales destacados sobre grupos de parlamentarios y think tanks y diversos circuitos académico-políticos.

La constelación de ONGs y organizaciones sociales que han desplegado sus iniciativas para cambiar los términos del TLC y para denunciar la situación de los derechos humanos y la falta de democracia en México, han encontrado apoyo en sus contrapartes naturales en los Estados Unidos (redes de ONGs y organizaciones sociales contra el Tratado, Iglesias y entre los parlamentarios norteamericanos que se oponen al Tratado. Sin embargo, han comenzado a tener una interlocución creciente en otras esferas del gobierno norteamericano, mucho mayor al espacio de las oposiciones partidistas tradicionales. Vale la pena entonces detenerse a analizar quienes son estas fuerzas y cuál es la coyuntura política en los Estados Unidos que facilita este protagonismo.

#### Los nuevos actores

Las ONGs que durante la década de los ochenta se desarrollaron teniendo como su objeto principal de intervención el movimiento popular, como instrumento de acción básica la educación popular y como origen social principal sectores de la intelectualidad católica progresista (las ONGs de izquierda), sufrieron, a partir del ascenso electoral de 1988 y del desarrollo del cardenismo como una opción de izquierda, una profunda convulsión y un drástico reacomodo en sus paradigmas. [7]

Más allá de sus diferencias internas, esta franja de ONGs se concibió durante años como parte o instrumento del movimiento popular, y actuó con él en una perspectiva clasista, gremial y de privilegio a las acciones directa de masas como elemento fundamental para

resolver la demanda social. El boom cardenista modificó, sin embargo, estas coordenadas de acción al actuar en el terreno cívico, nacionalista y electoral.

La gran mayoría de estas ONGs vieron al cardenismo en sus inicios con una enorme desconfianza y se incorporaron a él hasta después de pasado el proceso electoral, en lo que fueron las jornadas de defensa a la voluntad popular, en parte arrastrados por la movilización de sus "clientes".

A partir de ese momento se inicia en muchas de ellas una revaloración profunda de la acción cívica, de la política partidaria y de la lucha electoral. Su paso al cardenismo se realiza, sin embargo, de manera tardía, sin interlocutores significativos dentro del PRD, con el peligro de perder su perfil y con un problema básico: la mayoría de esas ONGs requieren para su sostenimiento de recursos económicos provenientes de la cooperación internacional, poco proclive a financiar actividades directamente partidarias. Su incorporación pública y abierta con el proyecto partidario cardenista representa así el peligro de cerrar sus fuentes de financiamiento básicas.

Simultáneamente la creciente interlocución de las ONGs "light" con sectores del Estado, el acceso de éstas a swaps y un nuevo marco fiscal replantea drásticamente su futuro y precipita su acuerpamiento y la búsqueda de un nuevo perfil. Nace así la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (COCD).

A partir de junio del 90 se precipita un proceso de construcción de redes nacionales que tiene cuatro ejes básicos: la cuestión ciudadana y la democracia; el comercio "justo" en el marco del TLC; la cuestión del medio ambiente y el desarrollo en el terreno del Foro Río 92; y, de manera destacada, los derechos humanos. Es común que varias ONGs participen indistintamente en varias de estas redes nacionales. Aunque las viejas redes construidas alrededor de afinidades ideológicas o de cuestiones temáticas (salud, mujeres, vivienda, educación popular, etc...) se mantienen, dejan de ser el terreno principal de acuerpamiento y acción.

En el centro de estas redes se encuentra la definición de las ONGs como instrumentos de acción ciudadana en la defensa e instrumentación de sus derechos, y la idea de que "la izquierda contemporánea mexicana es cada día menos partidista y más sociedad civil".

La fecha de arranque en este ejercicio de acción ciudadana fue el 18 de agosto de 1992, su terreno principal de acción: la observación de las elecciones federales. En sus comienzos la tarea de observación electoral fue iniciativa del Centro Potosino de Derechos Humanos y de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Rápidamente, la propuesta fue hecha suya tanto por la COCD como por diversas ONGs de Derechos Humanos. La observación realizada primero en San Luis Potosí, Distrito Federal y Tabasco, y después en Michoacán, Durango y Chihuahua, abarcó: las condiciones previas del proceso electoral, el papel de los medios masivos de comunicación, los recursos y la jornada electoral y en algunos casos el padrón. El proceso fue acompañado de la realización de talleres de capacitación, manuales, estudio de las leyes electorales estatales, formatos de observación y reporte. Entre los principales objetivos de la

observación electoral se encuentra la "constitución (de) un tribunal popular autónomo, desde el cual empiezan a expresarse ordenadamente los sentimientos de la nación frente al sistema gubernamental del fraude.

La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) [8] fue creada en el marco de las negociaciones trinacionales para pactar un Tratado de Libre Comercio (TLC). Es la contraparte mexicana del Action Canada Network (ANC), y de Mobilization on Development, Trade, Labor and Environment (MODTLE) y del Fair Trade Campaign de los Estados Unidos. Aunque la RMALC plantea estar constituida por ONGs y organizaciones sociales, su base constitutiva fundamental son las ONGs. Aunque su agenda abierta plantea puntos relacionados con la necesidad de que los gobiernos informen de las negociaciones y tomen en cuenta los puntos de vista de la "sociedad civil" llegando incluso a plantear un nuevo modelo de desarrollo regional muy cercano al propuesto por Cuauhtémoc Cárdenas en Nueva York el 8 de febrero de 1991, una parte significativa de sus integrantes piensa que hay que rechazar abiertamente el TLC, y otra que es un instrumento privilegiado para presionar al gobierno mexicano para que acceda a democratizar el país, cuidar el medio ambiente y respetar los derechos humanos y laborales. La coyuntura de negociación del TLC se convierte así en un "pretexto" para abrir, con la presión de los aliados norteamericanos y canadienses, un proceso de democratización acelerado, y para desgastar al régimen de Salinas en uno de sus puntos fuertes: la legitimidad internacional.

El Foro Mexicano de la Sociedad Civil para Río 92 (FOROMEX) [9] se creó en julio de 1991 en la lógica de proyectar la participación civil en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) asistiendo al "Foro Paralelo de la Sociedad Civil". El FOROMEX se constituye a partir de convocar al análisis y la acción del desarrollo sustentable vinculando explícitamente los problemas ecológicos con la agenda del desarrollo. Formado como una instancia nacional pasó a constituir foros regionales: Michoacán, Jalisco, Morelos, Durango, Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca. Su mecánica de funcionamiento estuvo basada en la realización de eventos nacionales discutir y consensar documentos posicionales sobre temas incluidos y no incluidos en la agenda de la CNUMAD. Convocados para responder a un proceso internacional, la mayoría de las organizaciones del Foro ingresan a una dinámica que no necesariamente responde a sus ritmos naturales ni refleja sus preocupaciones e intereses principales. Dos contradicciones claves atravesaron a los participantes. La primera está relacionada con la agenda: ¿se trata de discutir los problemas del desarrollo y medio ambiente a partir de un diagnóstico nacional para, desde ahí insertarse en la dinámica internacional?, o, por el contrario, ¿debería de partirse de lo ya avanzado afuera para ser retomado nacionalmente y retornar al plano mundial?. La segunda se refiere a la estrategia en si: de un lado se encontraban quienes consideraban que la Cumbre de la Tierra abría una coyuntura favorable para que las ONGs pudieran incidir en las políticas públicas y, por lo tanto, debían, priorizar su participación en la CNUMAD, y privilegiar el trabajo de cabildeo y de vínculo internacional, así como el manejo escrupuloso del documento base; del otro lado, se encontraban quienes consideraban que la posibilidad de impulsar un desarrollo sustentable pasa por una modificación profunda de las estructuras del poder y que, por lo

tanto, para lograr una incidencia real en las políticas oficiales se requiere crear una fuerza social capaz de frenar el modelo global.

A partir de 1990 se ha producido un verdadero "boom" en la formación de ONG-DH. Desde vertientes religiosas y laicas, teniendo como marco de referencia la creación de la CNDH -que representaba un reconocimiento de facto del hecho de que había una violación de los derechos civiles en el país y de que el Estado tenía responsabilidad en esta situación-, las denuncias de Amnistía Internacional y de Americas Watch [10] sobre la violación de los derechos humanos en ciertas regiones (Oaxaca y Chiapas) o áreas (cárceles), un financiamiento internacional significativo (por ejemplo, de la Fundación Ford), y un "extensionismo" de ciertas Diócesis relativamente inusual, decenas de ONG-DH se desarrollaron en provincia. Tanto el gobierno como las ONG-DH laicas tienen como eje la necesidad de implantar un Estado de Derecho, sobre la base de la acción combinada entre el Estado y la sociedad; por su parte, las ONGs religiosas abordan el problema básicamente en términos éticos, destacando la importancia de la justicia social y planteando un protagonismo social que enfrenta al Estado. Sin embargo, el conjunto de las ONG-DH sostiene que una visión de los derechos humanos hay un vacío: la construcción de la ciudadanía como una construcción de individualidades. Pareciera ser que la formación de la ciudadanía está -en nuestro país- irremediablemente ligada con una cultura que privilegia el origen gremial o de pertenencia grupal por sobre la individualidad. De cualquier manera, las ONG-DH son el sector más expansivo, influyente y consolidado de esta franja de ONGs en el México contemporáneo.

El conjunto de estas redes han avanzado de manera relevante en la construcción de relaciones binacionales con contrapartes norteamericanas. Estas contrapartes -sobre todo las ambientalistas, pero no únicamente ellas- son un factor político significativo en los Estados Unidos. De manera que -en el contexto de su propia lucha contra el TLC- han prestado a sus "socios" mexicanos el acceso a los medios masivos, las relaciones con parlamentarios y la incidencia social que tienen para difundir sus puntos de vista. No se trata, en sentido estricto, de una ayuda "desinteresada". Al presentar voces de la sociedad mexicana que divergen de la postura del gobierno pero que coinciden en muchos puntos en la suya propia, las ONGs norteamericanas muestran que sus posiciones no son proteccionistas. La insistencia en el hecho de que en México no se respetan los derechos humanos ni la democracia sirve en su lógica para movilizar a la opinión pública contra la firma del TLC. En el camino, los grupos civiles mexicanos han adquirido una voz y una interlocución externa que no corresponde al grado de implantación social que tienen dentro de su país.

#### La coyuntura americana

El cambio de administración en los Estados Unidos ha tenido consecuencias significativas para la coyuntura nacional no sólo por lo que significa el hecho de que en un nuevo proyecto político gobierne a la nación más poderosa del planeta, sino, también, por varias razones más;

- a) Una parte significativa de la clase política mexicana, comenzando por el Jefe del Ejecutivo construyó relaciones muy estrechas con la administración Bush. No se trató, solamente, de la cordialidad necesaria en las relaciones binacionales de dos países que tienen una frontera en común sino que, materialmente, se compartieron diversas propuestas políticas de fondo.
- b) El triunfo de Clinton pone fin a 12 años de gobiernos neoliberales en los estados Unidos y abre la puerta a una nueva fase de regulación de la intervención del Estado en la economía diferente a la que, en líneas generales, se ha implementado en México desde 1982.
- c) Tradicionalmente los gobiernos demócratas en los Estados Unidos han tenido una política mucho más intervencionista hacia México que los gobiernos republicanos.
- d) Bush hizo de la firma del TLC un lema de campaña política durante su lucha por la reelección presidencial. Clinton, sin oponerse a él, manifestó que habría que revisar dos puntos básicos relacionados con el Tratado: la ecología y la cuestión laboral. Aunque el Tratado fue firmado ya por los Presidentes de los tres países involucrados, aún debe ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, acompañados de los acuerdos en los dos puntos más conflictivos. Dentro de las fuerzas que apoyaron la candidatura de Clinton se encuentran quienes se oponen a la firma del Tratado, principalmente sindicatos y ambientalistas. Aunque la posición final de Clinton sobre el tema está aún procesándose, sus expectativas sobre el Tratado son distintas a las mexicanas y su definición final tendrá como punto obligado a estas fuerzas, si quiere mantener la "luna de miel" que la opinión pública norteamericana usualmente otorga a sus nuevos Presidentes.

Un momento clave en la redefinición de las relaciones que la nueva administración norteamericana piensa establecer con México son las audiencias que el Congreso norteamericano ha realizado y realizará nuevamente como marco de referencia en el debate sobre la posible aprobación del TLC. Estas audiencias se han convertido en un foro para quienes en Estados Unidos y México se oponen al Tratado. El debate rebasará, en mucho, el marco del TLC y mostrará un México distinto al que el gobierno mexicano está interesado en promover. La agenda alternativa que estará presente durante las sesiones de trabajo incluye: medio ambiente, derechos laborales y condiciones salariales en México, derechos humanos, migración, drogas y democracia.

La participación de Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar y Mariclaire Acosta en el primero de estos foros levantó una campaña de "quema de brujas" entre los círculos oficiales, sólo comparable a la ráfaga de excomunicaciones que sufrió el Senador Porfirio Muñoz Ledo a raíz de unas declaraciones a la revista Newsweek donde anunciaba su intención de informar al Congreso norteamericano sobre la situación de México en la perspectiva de evitar la aprobación del TLC.

El debate sobre el futuro del TLC está pues abierto, y más allá de su aprobación al lado de los acuerdos paralelos, ha propiciado un profundo cambio en la visión sobre México en los Estados Unidos.

Quienes se oponen a firmar un TLC con México desde una perspectiva proteccionista en los Estados Unidos argumentan que:

a) Con las maquiladoras se han perdido 550 mil empleos en los Estados Unidos, más los empleos asociados a ellos (un promedio de dos empleos adicionales por cada uno de los que salen del país). El TLC acelerará esta pérdida de empleos.

b) El TLC profundizará la degradación del medio ambiente en México. La falta de regulaciones ambientales y la corrupción mexicanas crean el terreno para una competencia desleal. En los casos específicos de la frontera y la producción de hortalizas eso tendrá un impacto directo en los consumidores norteamericanos.

c) El impacto del TLC en el agro mexicano provocarán un flujo de migrantes ilegales adicionales de entre uno y dos millones de personas.

d) El incremento en el movimiento comercial en las fronteras y la falta de controles aduanales facilitará el tráfico de drogas.

Quienes se oponen en los Estados Unidos al TLC desde una perspectiva "civilista", señalan que, con la firma del Tratado, los logros obtenidos por la sociedad civil norteamericana al forzar la aprobación de estrictas regulaciones ambientales contra las grandes corporaciones, se desvanecerán, pues estas compañías, al trasladarse a México podrán evadir fácilmente esas regulaciones. Simultáneamente señalan que la firma del TLC con un país en el que no se respetan los derechos humanos, muchas leyes no se cumplen y no hay democracia fortalecerá a un gobierno que no merece ser fortalecido si no acepta la democratización del país. [11]

Ambos son, sin embargo, fuerzas poderosas dentro de la sociedad norteamericana y se encuentran empeñados en hacer avanzar su posición. Parte de su estrategia es desmantelar la imagen de reformador que Salinas construyó durante los últimos años en los circuitos internacionales. El eje mismo de su argumentación para oponerse a la firma del TLC suponen caminar en contra de esa imagen.

Por lo demás, el debate sobre el libre comercio ha afectado profundamente al Partido Demócrata al punto de que en torno a este punto se encuentra profundamente dividido. La polémica no gira exclusivamente en torno a si seguir o no una política librecambista o proteccionista, sino que incorpora, de manera definitiva dos elementos adicionales: manejo ambiental y limitaciones presupuestales. Así las cosas, en contra del "libre comercio" se encuentran no solamente quienes quisieran una política proteccionista o los grupos ambientalistas, sino también, quienes temen que una política de libre comercio haga más grande el grave déficit presupuestal del gobierno Federal al verse obligado a apoyar programas de saneamiento ambiental o de capacitación de la mano de obra.



## El nuevo intervencionismo

Los principios básicos de la política exterior norteamericana que Clinton suscribirá pueden resumirse en cuatro puntos sustanciales: [12]

a) Los límites de la soberanía. La soberanía de los Estados y el derecho a que otros países no intervengan en sus asuntos internos no son principios absolutos. Hay excepciones. El principio de la soberanía de los Estados no puede significar que éstos tengan la libertad de favorecer la masacre de minorías religiosas, raciales o étnicas dentro de sus fronteras.

b) Los límites de la autodeterminación. Mientras el mundo esté organizado como está, algunas naciones no pueden ser Estados.

c) La necesidad de acuerdos intermedios. Estamos viviendo momentos de emergencia en los que es necesario encontrar nuevas formas de relación política en un mundo cada vez más globalizado y cada vez más fragmentado.

d) No se puede rehusar el liderazgo. Las acciones colectivas para incrementar o resguardar son, en el marco de la postguerra fría, una posibilidad real, pero sólo con el liderazgo de los Estados Unidos o de poderes regionales apoyados por él.

Dos hechos recientes confirman estos cuatro principios básicos. Por un lado, el apoyo más o menos generalizado de los circuitos liberales a la intervención militar en Somalia disfrazada de ayuda humanitaria; por el otro, el apoyo de Clinton a Ley Torricelli contra Cuba.

Estos principios se han visto alimentados, además, por una nueva ola de intervencionismo con profundas raíces sociales en los Estados Unidos, que plantea que se debe "buscar parar las guerras civiles y frenar los abusos gubernamentales en materia de derechos humanos". [13]

La promoción de la democracia en los países que no la tienen forma parte de los objetivos específicos de la nueva administración norteamericana. Destacados intelectuales liberales como Abraham F. Lowenthal, [14] director fundador del influyente Diálogo Interamericano, después de reconocer que la "Democracia no es una mercancía de exportación; no puede ser transportada de un lugar a otro" han sugerido algunas medidas para nutrir y reforzarla en las Américas. Sus propuestas contemplan la necesidad de que los Estados Unidos enfatizen su preocupación en la defensa de los derechos humanos y que critiquen a los regímenes que los violan; la necesidad de apoyar las redes democráticas que están creciendo en el continente; el apoyo al fortalecimiento de las instituciones gubernamentales; el apoyo de Washington a la formación de equipos y profesionales e independientes para monitorear elecciones "bajo requerimiento de los gobiernos soberanos- para ayudar a asegurar que las elecciones sean transparentes y libres; el sostenimiento de redes de organizaciones no gubernamentales que expresan las demandas ciudadanas; asimismo, sugiere el requerimiento de que los funcionarios

norteamericanos proporcionen señales claras de que el sostenimiento de la democracia es un objetivo de alta prioridad para los Estados Unidos. Aunque las opiniones de Lowenthal son sus opiniones personales expresan con claridad las convicciones de al menos una parte significativa de la administración Clinton sobre el tema.

### La democracia mexicana y los Estados Unidos

Más rápido que despacio la imagen reformadora y moderna que el gobierno de Salinas se había creado en los circuitos internacionales ha comenzado a derrumbarse. La demolición acelerada de esa imagen ha sido resultado tanto de la acción de las fuerzas que se oponen al TLC dentro de los Estados Unidos como de los propios actos de gobierno. Primero fue la participación de una institución financiera gubernamental en la creación de un Fondo para comprar empresas manufactureras norteamericanas en crisis y traerlas a México. [15] Después la sombrereada de los 25 millones de dólares. Entre tanto, la creación de un lugar común: en México existen leyes pero no se respetan; la democracia electoral es muy deficiente y los derechos humanos se violan permanentemente. [16] Efectivamente la "democracia" mexicana no parece tener mucho prestigio en los circuitos internacionales. Para el mismo Lowenthal [17] "Más de ochenta años después de su revolución, México está aún lejos de asegurar el "sufragio efectivo"; las elecciones locales recientes se han convertido en una especie de primarias; los resultados anunciados pueden entonces ser ratificados o modificados dependiendo de la ausencia o la presencia de manifestaciones en las calles". Y las críticas no provienen tan sólo de los liberales, radicales o de los grupos humanitarios. Un amplio reportaje publicado por Christopher Wood recientemente en la nada sospechosa de izquierdismo revista *The Economist* [18] señala, después de hacer un detallado recuento y apología de la reforma económica mexicana y de la iniciativa de firmar el TLC, que Vargas Llosa tenía razón cuando llamó a México la dictadura perfecta, y añade: "El establishment político mexicano no tiene ningún respeto profundo a los méritos del sufragio universal". Según el informe "México no es, en ningún sentido de la palabra, una democracia. El Gobierno está en manos de una élite burocrática no elegida que rinde cuentas sólo al presidente".

Hasta qué punto esta visión sobre la realidad política mexicana está extendida entre los círculos de poder de Washington lo muestra un hecho: durante 1992 el Instituto Nacional Democrático (NDI), organización sin fines de lucro perteneciente al Partido Demócrata, canalizó 200 mil dólares provenientes del Fondo Nacional para la Democracia (NED), organización establecida por el Congreso para promover la democracia y los principios democráticos en otros países, para financiar a grupos civiles mexicanos en la observación electoral. [19] Los recursos fueron otorgados al Consejo por la Democracia y la Asociación de Grupos Cívicos por la Democracia (Convergencia) para la observación electoral de los comicios del 12 de julio en Chihuahua, las elecciones legislativas de agosto de 1991 en la ciudad de México y los fondos durante 1992 fue el Frente Cívico Potosino, que recibió 55 mil dólares para financiar programas de educación sobre derecho cívicos y humanos, capacitación y esfuerzo de promoción para la incorporación de la mujer en asuntos cívico-políticos. Tradicionalmente, los recursos que la NED había canalizado a México se habían concentrado en organismos de corte empresarial, filoponistas y programas de educación de la CTM. El apoyo a grupos que desde la

sociedad civil se plantean explícitamente como de oposición es un indicador de como se ve a México desde los círculos de poder del vecino del norte.

Hasta dónde la administración Clinton intervendrá para forzar a la élite gobernante mexicana a permitir la democratización del país, no parece estar aún claro. Como señala Lowenthal: [20] "Los ensayos de Washington para promover la democracia han sido menos evidentes en naciones más grandes como México y Brasil, dónde el objetivo dominante en los Estados Unidos ha sido la estabilidad de largo plazo". Sin embargo, este escenario operó en una situación anterior al TLC. Las negociaciones sobre el TLC han modificado ya los patrones del quehacer político y la diplomática y la misma noción de soberanía nacional. Estos patrones fueron modificados tanto por los gobiernos como por las oposiciones partidarias y ciudadanas. En esas circunstancias parece poco probable que la administración Clinton vea con buenos ojos una mayor dilación en las promesas democratizadoras del régimen. Las presiones desde el norte para sanear la vida política nacional -legítimas o no se harán sentir. Probablemente las diferencias tengan que ver en torno a la intensidad de estas presiones. La presencia de observadores internacionales en los próximos comicios federales es, en esta lógica una posibilidad real. [21] El argumento de que la sorda lucha entre salinistas y dinosaurios empantana las posibilidades de reforma, vendido con éxito a funcionarios claves de la administración norteamericana, se ha venido diluyendo aceleradamente. Ciertamente, en mucho, estas presiones para democratizar se verán matizadas por los tiempos y resultados de las negociaciones en torno al TLC. Pero de que existirán, existirán. Quizás por eso, la ceremonia del natalicio de Benito Juárez fue celebrada por el Gabinete Presidencial en el Cerro de las Campanas y el secretario de Gobernación insistió en que los modelos políticos no se importan ni se exportan y, señaló, que allí fueron derrotados los apetitos de intervención extranjera y el equívoco de quienes, obsesionados en reyertas intestinas, quisieron ubicar sus intereses personales o de grupo por encima de los intereses superiores de la nación. [22]

Al abrir la caja de Pandora de la internacionalización de la política nacional en búsqueda de legitimidad, capitales y TLC, la administración de Salinas de Gortari, abrió también la puerta a los demonios de la nueva intervención. Fue el régimen y no la oposición quien impuso esas nuevas reglas del juego. Esos demonios no se podrán exorcizar al conjuro de los llamados a la unidad nacional, o sobre la base de satanizar a aquellos que quieren usarlos para su propio proyecto. Sensatamente, el único instrumento para manejar la nueva intervención, es quitarle sus banderas, es decir, abrir al país las puertas de la democracia plena y del respeto a los derechos humanos.

CITAS:

[\*] Asesor del INAH

[1] Mario Gill, Nuestros Buenos Vecinos, Editorial Azteca, Octava Edición, México, 1972.

[2] La heterogeneidad de las ONGs hace que una definición de ellas sea difícil. El Banco Mundial, en un "Operational Directive" ofrece la siguiente definición:

"La diversidad de las ONGs hace difícil una definición o clasificación sencilla. Las ONGs incluyen una amplia variedad de grupos e instituciones que son total o mayoritariamente independientes del gobierno. Caracterizadas principalmente por objetivos humanitarios o de cooperación en lugar de comerciales. La terminología varía: por ejemplo, en los Estados Unidos suelen llamarse Organizaciones Privadas Voluntarias (PVO), y la mayoría de las ONGs africanas prefieren llamarse o son llamadas "Organizaciones Voluntarias de Desarrollo". Aunque organizaciones como las universidades o los institutos de investigación pueden ser no-gubernamentales esta definición se refiere principalmente a las organizaciones privadas que desempeñan actividades para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, proporcionar servicios sociales básicos, o gestionar el desarrollo comunitario".

Por su parte, la ONU las define como: "...las personas jurídicas de carácter privado, sin ánimo de lucro y con objetivos de beneficio social hacia la comunidad en general que no tengan por objeto reivindicaciones gremiales o de grupo y que no se encuentran adscritas o vinculadas al sector público".

[3] Carlos Heredia, Los ciudadanos y los derechos políticos en México, en Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, México, 1991.

[4] Jonathan Fox, Agriculture and the Politics of the North American Trade Debate, LASA Forum, Vol. 23, num. 1. Spring 1992. Sin lugar a dudas, el trabajo más completo en torno a los inicios de este proceso es el de: Cathryn Thorup, "The Politics of Free Trade and the Dynamics of Cross Border Coalitions in U.S.-Mexican Relations", Columbia Journal of World Business, 26(2), Summer, 1991.

[5] La Jornada, martes 13 de abril de 1993. pág. 36.

[6] El Financiero, 27 de marzo de 1993.

[7] Para una visión sobre las ONGs mexicanas y su relación con los movimientos sociales véase: Luis Hernández y Jonathan Fox. "Mexico's Difficult Democracy: Grassroots Movements, NGOs and Local Government, de próxima publicación por la Fundación Interamericana.

[8] Para una visión de la red véase: Manuel García Urrutia. "La otra agenda del Tratado de Libre Comercio", en El Cotidiano núm. 43, septiembre-octubre 1991, UAM, México.

[9] Para una visión del Foro y su proceso véase: Hilda Salazar. "El medio ambiente y la participación ciudadana: El Foro Mexicano de la Sociedad Civil para Río 92" en El Cotidiano núm. 47, mayo 1992, UAM, México.

[10] Véase: America's Watch, "Human Rights in Mexico A Policy of Impunity New York, June 1990; y, Amnesty International, "Mexico: Human Rights in Rural Areas, London: AI, 1986.

[11] Véase, por ejemplo, el artículo de Andrew Reding, "Salinas Must Pay for Free Trade" en The Christian Science Monitor, del 19 de enero de 1993.

[12] Véase: George Weigel, National Interests and American Purpose, The World & I. Vol. 8 núm. January 1993, USA.

[13] Véase: Stephen John Stedman, "the New Interventionists", Foreign Affairs Vol. 72, núm. 1, 1993, USA.

[14] Ver Abraham F. Lowenthal, The United States and Latin American Democracy: Lessons from History, World Peace Foundation, February 1991.

[15] Véase El New York Times del 17 y del 18 de febrero.

[16] Véase, por ejemplo, el documento preparado para el Presidente Clinton previa a su entrevista con el presidente Salinas de Gortari dado a conocer por Dolia Estévez en el Financiero Internacional del 1 de febrero de 1993, o el artículo sobre la prensa en México "México: Much Press, Little Real Freedom" publicado por The Christian Science Monitor.

[17] Abraham F. Lowenthal, "Latin America: Ready for Partnership?", Foreign Affairs Vol. 72, núm. 1, p. 83. 1993.

[18] The Economist "Into the Spotlight", febrero 13, 1993.

[19] Véase: La Jornada, 7 de marzo de 1993.

[20] Abraham F. Lowenthal, "The United States and Latin American Democracy: Lessons from History", p. 17 World Peace Foundation, February 1991.

[21] El influyente Diálogo Interamericano sugiere en su informe "convergencia y comunidad: las Américas en 1993, Instituto Aspei. En los casos en que las elecciones nacionales se vean en peligro debido al fraude, la manipulación o la violencia, se debería presionar a los gobiernos: para que acepten observadores internacionales que vigilen el proceso electoral, desde la campaña hasta el recuento de votos. "Convergencia y Comunidad: las Américas en 1993", Diálogo Interamericano, p. 29, E.U.A. 1992.

[22] Ver La Jornada, 22 de marzo de 1993.